

Constitucion general y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Antonio Chavez Jacobo, contra el C. Alcalde de Acuitzco, por violacion de las garantías otorgadas por los arts. 16 y 27 del Código fundamental.

Hágase saber, publíquese y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo decretó en definitiva el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé:—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí: *Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Agosto 21 de 1874.—*Isidro Aleman*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por Antonio Chavez Jacobo, contra los procedimientos del C. Alcalde municipal de Acuitzco, que lo ha despojado de un terreno de su propiedad sin forma alguna de juicio, y violando con tal acto las garantías que consignan los arts. 16 y 27 de la Constitucion federal, y

Considerando: que segun aparece de las constancias de autos, el Alcalde 1º de Acuitzco resolvió de plano y sin forma alguna de juicio, que Chavez Jacobo no era propietario legítimo del terreno en cuestion, y que ese procedimiento importaba una violacion de las garantías que contiene el art. 16 Constitucional.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, de 11 de Agosto del presente año, y se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Antonio Chavez Jacobo, contra el procedimiento del Alcalde 1º de Acuitzco, que ha dado origen á este recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Aza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio María Altamirano*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. José M. Brambila, por sí y en representacion de D^a Luisa Cisneros y sus menores hijos, contra la 5ª Sala del Supremo Tribunal de dicho Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice.

Cuando se trató en el presente juicio de amparo de la suspension provisional del acto reclamado, el que suscribe, al emitir su parecer negativo, dijo lo siguiente:

“D. José M^a Brambila, por sí y á nombre de su esposa Doña Luisa Cisneros y de sus menores hijos, entabla amparo contra el Juez 1º de lo civil de esta Capital y la 4ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por haber conocido y fallado en contra de los peticionarios, en un juicio promovido por Doña Clara Corral sobre propiedad de unas casas, y en contra de la Sala Colegiada del mismo Tribunal, porque ac-

tualmente conoce de aquel juicio en 3ª y última instancia, alegando que debiendo su nombramiento tanto al Juez como los Magistrados que ejercen el poder judicial, en el Juzgado y Tribunal mencionados, al Supremo Tribunal de Justicia el primero, y al Soberano Congreso del Estado los segundos, y no á la eleccion popular directa, como cree que debia ser, segun lo prevenido por el art. 109 de la Constitucion general, son incuestionablemente ilegítimos é incompetentes, y con sus procedimientos han atacado y atacan las garantías que otorga á los peticionarios el art. 16 de la propia Constitucion.

“El Presidente de la Sala Colegiada informa sosteniendo, conforme á la Constitucion general, la legitimidad de los nombramientos de los jueces de 1ª instancia por el S. Tribunal de Justicia y de los Magistrados que componen éste por el Soberano Congreso del Estado; esplica el art. 109 del Código fundamental, en que se apoya el recurso entablado, que no previene la eleccion popular en primer grado, siendo de eleccion popular y de acuerdo con dicho artículo constitucional, la que se ejecuta para los Magistrados en 2º grado, y para los Jueces en 3º, segun lo prevenido por la Constitucion particular de Jalisco; y concluye por manifestar, que serán incalculables los males que surgirían si se abriera la puerta á los errores que sientan los peticionarios, pues era necesario cesar en el conocimiento de todos los negocios judiciales y excarcelar á los criminales de todas clases. Agrega, que vendria á tierra tambien la jurisdiccion de los Tribunales de Circuito y de Distrito, por no emanar sus nombramientos directamente del pueblo.

Al rendir la Sala colegiada su segundo informe, se ha referido al primero, con apoyo del que el Promotor, y considerando que por ningún artículo de la Constitucion general, se previene que los nombramientos de los funcionarios del poder judicial en los Estados, se haga por eleccion popular direc-

ta en primer grado; que la Constitucion particular de Jalisco ha podido disponer y dispuesto, sin eponerse al Pacto federal, que los Magistrados se nombren por el Soberano Congreso y los Jueces de 1ª instancia, por el Supremo Tribunal de Justicia, como de hecho fueron nombrados los Magistrados y el Juez que han conocido y conocen del juicio promovido por Brambila; que no porque se elijan los funcionarios del Orden judicial tal como lo previene la Constitucion de Jalisco, puede decirse que su autoridad no emana del pueblo, por emanar de él precisamente la de aquellas personas que nombra por medio de sus directos representantes al Congreso del Estado, en elecciones indirectas en segundo y tercer grado; que lo resuelto en el juicio de amparo contra los Magistrados del S. Tribunal de Querétaro, citado por el peticionario, no tiene aplicacion en el presente juicio, por ser diferentes las constituciones de aquel Estado y la de Jalisco, sobre nombramiento de jueces y magistrados; y por último: que para cortar el abuso que se va introduciendo de solicitar amparo contra las leyes y actos mas aceptables y legítimos, quitando el tiempo á las autoridades con la necesidad de sustanciar recursos notoriamente maliciosos é improcedentes, con que se trata de convertir en agente de miras reprobadas á la augusta justicia de la Union y de prostituir el respetable juicio de amparo, se hace indispensable ya, que los jueces hagan uso de la facultad que les concede el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, ó mas bien, que cumplan con la prevencion de ese artículo.

Con fundamento de lo expuesto, el Promotor pide.

1º: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. José M. Brambila y representados, contra las autoridades judiciales que menciona, por sus procedimientos de que se queja.

2º. que se imponga á los peticionarios la multa de cien pesos.

Guadalajara, Diciembre 13 de 1873.—
(Firmado)—A. Camarena.

E^a copia. Guadalajara, Diciembre 13 de
1873.—A. Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Octubre 29 de 1873.—Vis-
tos: el C. José M. Brambila de esta vecin-
dad, por sí, y en representacion de D^a Luisa
Cisneros y de sus menores hijos, se presentó
en este Juzgado entablado juicio de am-
paro y proteccion de garantías, haciendo
valer este recurso en que ha sido tratado
con injusticia por el C. Juez 1^o de lo civil
de esta Capital y por la 4^a Sala del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado, en un
juicio seguido en su contra por la represen-
tante de la testamentaria de D. Ignacio
Brambila. El amparo lo entabló contra la
5^a Sala del Supremo Tribunal, que conoce
hoy del recurso de súplica entablado por el
mismo C. José M. Brambila, y que se ha
violado en su contra el art. 16 de la Cons-
titucion general, por no existir competencia
en los Tribunales de Jalisco, en razon de
no estar nombrados popularmente, con in-
fraccion notoria del art. 109 de la misma
Constitucion. Pidió igualmente la suspen-
sion del acto reclamado, que previos los trá-
mites correspondientes le fué negada. El C.
Magistrado en los dos informes que evacuó,
con buenas razones demostró, que el Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado, tiene
una existencia legal, por ser nombrado por
el Congreso del Estado, conforme lo previe-
ne la Constitucion del mismo. Este Juzgado,
Considerando:

1^o: que el mismo C. Brambila, promove-
dor de este juicio, ha reconocido la compe-
tencia, tanto del Juez de 1^a instancia ante
quien se inició la demanda que se entabló
en su contra, que reconoció igualmente al
Magistrado que falló en 2^a instancia y que
tácitamente reconoce al Magistrado de la
5^a Sala, ejecutor del acto reclamado, porque

sin ser autoridad no podia entablar amparo,
porque este recurso no puede entablarse con-
tra particulares, sin que baste para que no
se tenga por reconocidas las autoridades que
han intervenido en ese juicio, que hoy se
tenga como representante de sus hijos me-
nores, pues éstos no tienen derechos inde-
pendientes de los derechos de su padre, en
el juicio que contra el se sigue.

2^o: que tanto el art. 109 como los arts.
39, 40 y 41 de la Constitucion general de
1857, que tratan de la soberanía nacional
y forma de Gobierno, son tomados literal-
mente del acta constitutiva y de la Consti-
tucion general de 1824, como se ve en la
historia del Congreso Constituyente de 1857,
escrita por el C. Francisco Zarco, tomo 2^o
fojas 203 á la 220.

3^o: que la Constitucion de 1824, repu-
blicana, representativa, democrática, fede-
ral, compuesta de Estados libres y sobera-
nos, no solo reconoció el derecho de los Es-
tados para establecer su régimen interior,
sino que determinó en su art. 160, que los
Supremos poderes de los Estados, legislati-
vo y ejecutivo fueran electos popularmente,
y el poder judicial de los Tribunales de cada
Estado, se ejerciera por los Tribunales que
estableciera su Constitucion; y en efecto, el
Congreso constitucional de Jalisco, com-
puesto de los ciudadanos mas notables de la
época, que figuraron aun despues en grande
escala en la Constitucion de Jalisco de 1824
se dispuso que los Magistrados del Supre-
mo Tribunal fuesen nombrados por el C.
Gobernador, á propuesta en terna del Se-
nado, y

4^o: Considerando por último: que la sen-
tencia de amparo pronunciada por la Su-
prema Corte de Justicia, principiada en el
Juzgado de Distrito de Querétaro, que quie-
re tenerse por apoyo por el Sr. Brambila,
como ejecutoria en el presente juicio, no
puede tomarse en consideracion por falta de
identidad.

Por tales consideraciones y fundamentos
y apoyado este Juzgado en la ley de 20 de

Enero de 1869, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, falla con las siguientes proposiciones:

1ª: La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José M. Brambila, por no haberse violado en su contra la garantía constitucional que consigna el art. 16 de la Constitucion general, por las autoridades judiciales del Estado.

2ª: Notifíquese esta sentencia; publíquese en el periódico oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.
—D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.

Es copia. Guadalajara, Enero 5 de 1874.
—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México; Enero 28 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. José María Brambila, por sí y en representacion de Dª Luisa Cisneros y sus menores hijos, contra la 5ª Sala del Supremo Tribunal de dicho Estado, que conoce del recurso de súplica entablado en un negocio del órden civil por el solicitante, alegando la violacion en su persona del art. 16, por ser incompetentes los Tribunales de Jalisco, en razon de no estar nombrados popularmente, con infraccion del art. 109 de la Constitucion; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que conforme al art. 36 de la Constitucion particular del Estado de Jalisco, la Legislatura del mismo debe nombrar á los miembros del Tribunal Superior de Justicia, prescripci6n que en nada se opone á las prescripciones del pacto federal que invoca el quejoso, por cuyo motivo tampoco es admisible la tacha de ilegitimidad y de incompetencia opuesta al Tribunal, por

la circunstancia de no haber sido electo popularmente.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—José María del Castillo Velasco.—Simón Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia. México, Octubre 7 de 1874.—
Enrique Landa.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por varios ciudadanos, contra los procedimientos del C. Recaudador de la contribucion extraordinaria impuesta por la Legislatura de ese Estado, en su decreto número 47, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

I

Preliminares.

El Administrador de correos, encargado de llevar la voz fiscal en el presente negocio, dice: que en fines de 1873, la Administra-